Recomendación 1/95

La Recomendación 1/95, primera que la CDHDF envía al licenciado José Antonio González, en su calidad de Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se refiere a robos totales o parciales de automóviles que por distintas razones quedan a disposición del Ministerio Público.

La investigación descubrió que los agentes del Ministerio Público omiten de manera sistemática su responsabilidad de conservar en buen estado los bienes —específicamente, los automóviles— relacionados con las averiguaciones previas que inician.

Por ello, la CDHDF solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que iniciara los procedimientos administrativos para determinar la posible responsabilidad de nueve agentes del Ministerio Público señalados en la Recomendación. Asimismo, se pidió que se restituyan los vehículos o las autopartes robados a los propietarios, o que, en su defecto, se les reembolse su valor actual.

Además, la Comisión propone que se garanticen la vigilancia, la guarda y la custodia de los vehículos que queden a disposición del Ministerio Público, asignando lugares y personal para ello.

México, D.F., 24 de enero de 1995

Licenciado José Antonio González Fernández
Procurador General de Justicia del Distrito Federal

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 17, fracciones I, II inciso a) y IV, 22 fracción IX y 24, fracciones I y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 95, 96, 99 y 100 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en diversos expedientes relacionados con el robo, total o parcial, de automóviles puestos a disposición del Ministerio Público.

I. Investigación sobre los hechos

1. El 11 de mayo de 1994 se recibió en esta Comisión un escrito de queja del señor José Ángel Sánchez Porcayo, al que se asignó el expediente CDHDF/121/94/CUAUH/D0695.000. Señala el quejoso que el 11 de abril de 1994 circulaba en su automóvil Volkswagen Sedán, placas 604EFJ, color azul, por la Avenida Pasteur. Al cruzar la Avenida Cuauhtémoc, un camión de servicios de alcantarillado del Departamento del Distrito Federal se impactó contra él. El 12 de abril del mismo año se inició la averiguación previa 5a./527/94-04, por daño en propiedad ajena, y su vehículo quedó estacionado en la calle a disposición de la 5a. Agencia Investigadora. El 15 de abril del mismo año, el señor López Porcayo se presentó en la Agencia, con los documentos que acreditaban la propiedad de su vehículo y solicitó a la titular de la Mesa 16, del turno matutino, la devolución del mismo. Esa funcionaria le contestó que no se lo podía devolver, puesto que no estaba a su disposición. El mismo día inició la averiguación previa 6a./918/94-04, por el delito de robo de vehículo estacionado en la vía pública, contra quien resulte responsable. Esta averiguación previa está aún en trámite.

2. El 16 de mayo de 1994, el señor José Luis Hernández Ortega presentó una queja ante esta Comisión, a la que se asignó el expediente CDHDF/122/94/MHGO/D0740.000. En ella señala que el 30 de abril de 1994, entre las 9:30 y las 10:00 horas, tuvo un percance automovilístico con un camión refresquero, cuando circulaba acompañado de dos amigos. Fueron puestos a disposición del licenciado Gregorio Ramírez Espinoza, titular en turno de la 9a. Agencia del Ministerio Público, con lo que se inició la averiguación previa 9a./2015/94-04. Esta averiguación se consignó el 2 de mayo de 1994 al Juzgado 49o. Penal por el delito de robo calificado, y ese

mismo día, la titular de dicho Juzgado, ordenó la inmediata libertad de los tres inculpados, al considerar ilegal su detención por no haberse fundado y motivado los supuestos de flagrancia.

En ampliación de su queja, el 19 de mayo de 1994, José Luis Hernández Ortega manifestó que su vehículo, marca Ford Topaz, modelo 1989, serie AL92GP305-36, motor F30536 y placas LHD-6012, también quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la 9a. Agencia Investigadora. Al decretar la libertad del quejoso, con el oficio 571 de 18 de mayo de 1994, la Juez 49a. Penal ordenó también la devolución del automóvil. Sin embargo, al presentarse en la 9a. Agencia del Ministerio Público, para que se diera cumplimiento a la orden judicial, se le informó que su vehículo había sido robado de las puertas de la Agencia. En ese momento, se inició la averiguación previa 9a./02282/94-05 por el delito de robo de vehículo estacionado en la vía pública, contra quien resulte responsable. La averiguación se envió a la reserva por no haberse identificado a los presuntos responsables.

3. El mismo 16 de mayo de 1994 se recibió en esta Comisión una queja del señor Raúl Vicente Falcón Macías, a la que se asignó el número de expediente CDHDF/121/94/CUAUH/D0777.000. El quejoso manifestó que el 7 de diciembre de 1992, cuando tripulaba su automóvil Nissan Tsuru II, placas 532DMX, fue detenido por agentes de la Policía Judicial y puesto a disposición de la 51a. Agencia del Ministerio Público, iniciándose la averiguación previa 51/AEPJ/565/92-12 por el delito de portación de arma prohibida. El auto quedó a disposición de la 51a. Agencia del Ministerio Público y, a pesar de que el quejoso acreditó debidamente su propiedad, la titular de la Mesa se negó, durante casi dos años, a autorizar que se le devolviera. Cuando finalmente lo hizo, en el corralón ubicado en Cabeza de Juárez, se informó al señor Falcón Macías que, en virtud del tiempo transcurrido, el automóvil se había vendido en subasta pública.

4. El 26 de mayo de 1994 se recibió un escrito de queja del señor Ángel Reyes Reyes, al que se asignó el expediente CDHDF/121/94/CUAUH/D0852.000. En dicho escrito el quejoso informó que, con motivo de un accidente automovilístico ocurrido el 31 de marzo de 1994, su vehículo marca Nissan fue llevado a la 3a. Agencia Investigadora, y puesto a disposición del Ministerio Público. Ya que el automóvil estuvo en la calle aproximadamente seis días, el quejoso notó que le faltaban el radio, las bocinas, el encendedor y la parrilla. Al informar lo anterior al agente del Ministerio Público, éste le contestó que una vez que se liberara el vehículo se levantaría acta por robo. Posteriormente, se trasladó el automóvil al corralón de Cabeza de Juárez II. El 13 de abril de 1994, al recibir el vehículo, el quejoso se dio cuenta de que le hacían falta, además de los objetos ya mencionados, la marcha, el alternador, el carburador, el distribuidor, la batería, tres llantas, la defensa delantera, el gato mecánico y la llave de cruz. Se inició averiguación previa por el delito de robo, pero se envió a la reserva por falta de elementos.

5. El 27 de julio de 1994, el señor Pedro Reyes Sánchez presentó su escrito de queja en esta Comisión, al que se asignó el expediente CDHDF/121/94/GAM/D1352.000. En dicho escrito, el quejoso manifestó que el 19 de junio del mismo año compró un automóvil Chrysler Spirit 1991. Aparentemente el vehículo era robado, y por este motivo quedó a disposición del agente del Ministerio Público en la 39a. Agencia Investigadora. Como de las investigaciones realizadas se desprendió que el quejoso había sido un comprador de buena fe, el agente del Ministerio Público le dio el automóvil en depósito. Sin embargo, al recibirlo, el señor Reyes Sánchez notó que le faltaban las llantas, los rines, los faros, las molduras delanteras, una calavera y una parrilla trasera que estaba en el interior del vehículo. Por lo anterior, se inició la averiguación previa 39a./00373/94/06 por el robo de autopartes, contra quien resulte responsable. Todavía está en trámite.

6. El 23 de septiembre de 1994, se recibió escrito de queja del señor David Herrejón Silva, al que se asignó el expediente CDHDF/121/BJ/D1882.000. El señor Herrejón señaló que el 11 de mayo de 1994 se inició la averiguación previa 3a./1831/94-05 con motivo de un accidente automovilístico, y su vehículo quedó a disposición de la 3a. Agencia Investigadora del Ministerio Público. El 2 de junio, después de que el quejoso presentó un billete de depósito para garantizar los daños causados, el agente del Ministerio Público ordenó que se le entregara el vehículo. Al recibirlo, se percató de que le faltaba el cristal de la aletilla trasera

izquierda, la llanta trasera izquierda, la llanta de refacción, herramientas varias, los dos asientos delanteros, el encendedor y el cenicero, la batería, el extinguidor, la alfombra de la cajuela, y de que el autoestéreo estaba dañado. Por ello, inició la averiguación previa 7a./3897/94-06 por el delito de robo, que posteriormente se envió a la reserva.

7. El 23 de septiembre de 1994 se recibió en esta Comisión la queja del señor Manuel Maldonado López, a la que se asignó el expediente CDHDF/121/94/BJ/D1880.000. En su escrito, el señor Maldonado López señaló que el 5 de octubre de 1993 fue detenido por estar relacionado con la averiguación previa 12a./2988/93. Cuando lo detuvieron iba a bordo de su automóvil Volkswagen Sedán 1978, placas 459ANB, el cual quedó a disposición del agente del Ministerio Público en las afueras de la 12a. Agencia Investigadora. El 8 de octubre de 1993, los familiares del quejoso se dieron cuenta de que el vehículo se encontraba desvalijado, sin llantas, sin asientos, sin motor, "que sólo estaba el cascarón". Cuando se presentaron en la 12a. Agencia para recuperarlo, la titular de la Mesa 5, después de informarles que no encontraba la indagatoria, les sugirió que endosaran la factura a nombre de alguno de ellos para poder reclamarlo. A pesar de que así lo hicieron, la orden de liberación se le entregó directamente al quejoso, casi un año después y debido a la intervención de esta Comisión. Sin embargo, el automóvil nunca apareció. Al respecto se inició la averiguación previa 50a./818/94-10 por robo de vehículo, contra quien resulte responsable. Esta averiguación se encuentra en trámite.

8. El 30 de septiembre de 1994 una Visitadora de esta Comisión se entrevistó con la licenciada Elena García García, agente del Ministerio Público adscrita a la 12a. Agencia Investigadora. La funcionaria refirió, entre otras cosas, "que ella no es cuidacoches, que la Agencia no tiene quien cuide los coches; que es imposible que con toda la carga de trabajo que tienen todavía tengan que cuidar coches, por lo que ella no es responsable de la pérdida sufrida".

9. El 7 de junio de 1994 recibimos el informe rendido por el licenciado Sigfrido Pavón Bruschetta, Subdelegado Regional de Averiguaciones Previas en la 9a. Agencia Investigadora del Ministerio Público, en el que señala que el vehículo del señor José Luis Hernández Ortega "quedó a las afueras de la 9a. Agencia por carecer de estacionamiento propio y de servicio de vigilancia durante 24 horas del día para que cuiden los vehículos que quedan a disposición de los agentes del Ministerio Público".

II. Evidencias

1. Escritos de queja presentados ante esta Comisión por los señores José Ángel Sánchez Porcayo, José Luis Hernández Ortega, Raúl Vicente Falcón Macías, Ángel Reyes Reyes, Pedro Reyes Sánchez, David Herrejón Silva y Manuel Maldonado López, en los que señalaron que, por diversas razones, sus vehículos habían quedado a disposición de alguna Agencia Investigadora del Ministerio Público y ahí habían sido robados, total o parcialmente, sin que hasta el momento se les haya reparado el daño.

2. Averiguaciones previas:

a) La 5a./527/94-04, iniciada el 12 de abril de 1994, por daño en propiedad ajena, en la que consta que el automóvil Volkswagen Sedán 1990, placas 604EFJ, color azul, quedó a disposición de la 5a. Agencia Investigadora del Ministerio Público; y 6a./918/94-04, iniciada con motivo de la denuncia de robo de vehículos, presentada por José Ángel Sánchez Porcayo.

b) La 9a./2015/94-04, iniciada con la puesta a disposición de José Luis Hernández Ortega y otros en la 9a. Agencia Investigadora del Ministerio Público, en la que consta que el personal del primer turno tuvo a la vista, a las 18:00 horas del 30 de abril de 1994, el automóvil Ford Topaz, azul marino, con dos engomados —LHD-6012 y 565-DNT— ambos del Estado de México, y que éste se encontraba en buen estado de carrocería, pintura e interiores; y 9a./02282/94-05, iniciada con la denuncia de José Luis Hernández Ortega, por el delito de robo de vehículo estacionado en la vía pública, contra quien resulte responsable.

c) La 51a./AEPJ/565/92-12, iniciada con la puesta a disposición de Raúl Vicente Falcón Macías ante el agente del Ministerio Público de la 51a. Agencia Investigadora, de cuyas actuaciones se desprende que el vehículo Nissan Tsuru II, modelo 1989, color rojo, placas 532DMX, quedó a disposición de la agente del Ministerio Público, licenciada Patricia Aguilar Vega, quien no autorizó la devolución del vehículo sino hasta el 4 de noviembre de 1994, y por la intervención de esta Comisión.

d) La 3a./1281/94-03, que se inició con la puesta a disposición de Ángel Reyes Reyes en la 3a. Agencia Investigadora del Ministerio Público, averiguación en la que quedó asentado que su vehículo Nissan Tsuru 1991, placas 000422 de servicio público, color ecológico, quedó a disposición de dicha Agencia, primero en las afueras de esas oficinas y posteriormente en el corralón Cabeza de Juárez. En la Mesa de Trámite quedó un desglose de la averiguación para que se investigara el robo de autopartes denunciado por Ángel Reyes Reyes.

e) La 39a./373/94-06, iniciada por robo de autopartes en agravio del señor Pedro Reyes Sánchez, contra quien resulte responsable.

f) La 3a./1831/94-05, que se inició por el delito de daño en propiedad ajena con motivo de un accidente automovilístico, a raíz del cual el vehículo Volkswagen Corsar, 1986, placas TNK4992, color gris, quedó a disposición de la 3a. Agencia Investigadora; y 7a./3897/94-06, que se inició con la denuncia de robo de autopartes presentada por David Herrejón Silva.

g) La 12a./2988/93-10, en la que consta que el automóvil Volkswagen Sedán 1978, placas 459ANB, quedó a disposición de la Mesa 5 de Trámite en la 12a. Agencia Investigadora del Ministerio Público; y 50a./818/94-10, iniciada por Manuel Maldonado López por el delito de robo de vehículo estacionado en la vía pública, contra quien resulte responsable.

3. Entrevista con la licenciada Elena García García, agente del Ministerio Público de la 12a. Agencia Investigadora, en la que manifestó que "ella no es cuidacoches y tampoco la Agencia tiene quien cuide los coches; que es imposible que con toda la carga de trabajo que tienen todavía tengan que cuidar coches, que no es responsable de la pérdida sufrida".

4. Informe rendido por el licenciado Sigfrido Pavón Bruschetta, Subdelegado de Averiguaciones Previas de la 9a. Agencia Investigadora, en el que se asentó que "el vehículo (*sic*) queda a las afueras de la 9a. Agencia... lo anterior por carecer de *estacionamiento propio* en dicha Agencia, y donde además se carece también de servicio de Vigilancia (*sic*) durante las 24 horas del día para que cuiden dichos vehículos (*sic*)..."

III. Observaciones

De los siete casos planteados, se observa que en tres hubo robo total de los automóviles y en cuatro fueron robadas partes de los vehículos.

Los robos, parciales o totales, de los vehículos que por alguna causa quedan a disposición de las agencias investigadoras del Ministerio Público constituyen un problema que día a día adquiere mayores dimensiones. Este problema se debe, en gran parte, a la falta de lugares destinados para la guarda y custodia de dichos vehículos, y de personal especialmente dedicado a vigilarlos.

Los vehículos puestos a disposición del Ministerio Público permanecen en la calle —frente a las oficinas de las agencias o en las calles circundantes— durante varios días, sin ninguna vigilancia. Esto sirve de excusa o pretexto a los agentes del Ministerio Público para negar su responsabilidad respecto de los bienes que, como lo establece el artículo 100, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, están obligados a conservar del mejor modo posible.

La opinión de funcionarios del Ministerio Público es que ellos no son responsables ni de los vehículos ni de las pérdidas sufridas, puesto que *no son cuidacoches, no tienen personal para*

destinarlo a cuidar los vehículos que quedan a su disposición, y no tienen lugar cerrado y vigilado para estacionar los coches.

Por otra parte, es un hecho que ya no hay suficiente lugar en los corralones para enviar los vehículos.

De acuerdo con la circular C/014/89 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los agentes del Ministerio Público están obligados a determinar la situación jurídica de los objetos o valores relacionados con averiguaciones previas con prontitud, evitando con ello su deterioro o destrucción. En la realidad, el trámite para obtener la liberación de los vehículos, caso específico que nos ocupa, se encuentra muy viciado, afectando los derechos de los particulares y la procuración de justicia.

En la investigación efectuada, se observó que en muchas ocasiones se retienen vehículos que no se encuentran relacionados con el delito que se investiga, como en el caso del señor Falcón Macías, que fue detenido en supuesta flagrancia por el delito de portación de arma prohibida cuando iba a bordo de su automóvil, y a quien, dos años después de los hechos, se le informó que, en virtud del tiempo transcurrido, su automóvil se había vendido en subasta pública.

También son innumerables los casos en que los agentes del Ministerio Público no realizan un inventario suficiente y adecuado de los vehículos, concretándose a dar fe de los que tienen a la vista. Se llega al extremo de no relacionar el vehículo en la averiguación previa correspondiente: en el caso del señor Manuel Maldonado López, después de una búsqueda *exhaustiva*, se ubicó al automóvil relacionado en un acta especial, totalmente ajena a los hechos por los que fue consignado.

Por último, es preciso hacer notar que, en todos los casos, ante el reclamo de las personas que se han visto despojadas total o parcialmente de su automóvil, el Ministerio Público inicia una averiguación previa por robo de automóvil o de autopartes, contra quien resulte responsable. Por supuesto, este responsable nunca aparece y la averiguación previa va a la reserva porque no existen elementos para continuar con la investigación.

Las evidencias recabadas nos permiten considerar que, en general, se violan sistemáticamente los derechos de los ciudadanos que, por una u otra causa, se ven obligados a dejar sus vehículos bajo la *guardia y custodia* del Ministerio Público. Y, en particular, en los siete casos que se plantean en esta Recomendación hubo violación a los derechos de los señores José Ángel Sánchez Porcayo, José Luis Hernández Ortega, Raúl Vicente Falcón Macías, Ángel Reyes Reyes, Pedro Reyes Sánchez, David Herrejón Silva y Manuel Maldonado López, por la negligencia de los agentes del Ministerio Público José Reyes Hernández, de la 5a. Agencia; Gregorio Ramírez Espinoza y Alejandro Ramírez Evangelista, de la 9a.; Patricia Aguilar Vega, de la 51a.; Nicolás Chávez Cisneros, de la 3a; Raymundo Cid Magaña y Arlete Irazabal San Miguel, de la 39a.; Rafael Rincón Rodríguez, de la 3a., y Elena García García, de la 12a.

Ante esta situación, es impostergable que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tome las medidas adecuadas y suficientes para *asegurar los bienes, instrumentos y objetos relacionados con los hechos delictivos, en los casos que corresponda...*, según lo establece el artículo 16, fracción VI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y cuya omisión se encuentra sancionada en el artículo 214, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal.

IV. Recomendaciones

Primera

Primera. Instruir a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que se inicien los procedimientos correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron los agentes del Ministerio Público José Reyes Hernández, de la 5a. Agencia; Gregorio Ramírez Espinoza y Alejandro Ramírez Evangelista,

de la 9a.; Patricia Aguilar Vega, de la 51a.; Nicolás Chávez Cisneros, de la 3a.; Raymundo Cid Magaña y Arlete Irazabal San Miguel, de la 39a.; Rafael Rincón Rodríguez, de la 3a., y Elena García García, de la 12a., respecto de la guarda y custodia de los vehículos propiedad de los señores José Ángel Sánchez Porcayo, José Luis Hernández Ortega Raúl Vicente Falcón Macías, Ángel Reyes Reyes, Pedro Reyes Sánchez, David Herrejón Silva y Manuel Maldonado López, y, en su caso, les sean aplicadas las sanciones que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que, de encontrarse elementos constitutivos de delito, se lleven a cabo las averiguaciones previas correspondientes.

Segunda

Segunda. Que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para restituir los vehículos —o las autopartes— robados a los quejosos, o para que, en su defecto, se les reembolse su valor actual.

Tercera

Tercera. Que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para que se aplique lo establecido en la circular C/014/89, y los vehículos puestos a disposición del Ministerio Público sean devueltos, a la brevedad posible, a quien acredite su propiedad.

Cuarta

Cuarta. Que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para garantizar la vigilancia, guarda y custodia de los vehículos que queden a disposición de los agentes del Ministerio Público, y se destinen lugares especiales para ello.

Con fundamento en los artículos 48 de la Ley y 103 del Reglamento Interno de esta Comisión, le ruego que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación nos sea informada dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, y que, en su caso, las pruebas sobre su cumplimiento nos sean enviadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo anterior.

**El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Luis de la Barreda Solórzano**